



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

AGP

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “ASISTENCIA Y DEFENSA JURÍDICA A MENORES TUTELADOS POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL ÁMBITO PENAL ESPECÍFICO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000 DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR (LORPM)”

De acuerdo con el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al considerarse este contrato como de servicios, se procede a justificar el recurso a la gestión indirecta para su prestación.

De acuerdo con lo expuesto en la memoria justificativa de la necesidad del contrato así como en la propia descripción de las actuaciones e intervención a desarrollar, las prestaciones propias del presente contrato se consideran de carácter ordinario de la Administración competente en materia de infancia, pero que deben ser prestadas por personal cualificado y con experiencia constatada para tal fin y que dé cobertura a las necesidades de estos menores durante su comparecencia ante el fiscal o la autoridad judicial.

El artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, previene la posibilidad de que las personas menores de edad puedan solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses; ello sin perjuicio de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal para actuar en defensa de los derechos de los menores.

En tal sentido, el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, establece que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se habrán de interpretar de forma restrictiva y, en todo caso, siempre atendiendo a su interés superior. A los efectos de interpretar y aplicar en cada caso del interés superior del menor, se habrá de tener en cuenta como elemento general -entre otros- la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

El artículo 27.2 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, establece que *“La Comunidad de Madrid proporcionará asistencia y defensa letrada a todos los niños que se encuentran en el sistema de protección sin restricciones ni riesgos para la confidencialidad y en un espacio de confianza.*

En el caso de aquellos que pudieran resultar penalmente responsables con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la Comunidad de Madrid les facilitará asistencia y defensa letrada, a través de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, para que puedan, a su elección, ejercitar las acciones correspondientes a través de este medio o ser defendidos por abogados especializados del turno de oficio”.

Con ocasión de una licitación anterior con el mismo objeto, se evacuó el día 1 de julio de 2008 un primer informe por los servicios Jurídicos en la entonces Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en el que **se concluía que este contrato no suponía una externalización de funciones propias de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid porque la defensa de menores tutelados no formaba de la actividad del Cuerpo y que su eventual exención implicaría entrar en conflicto de intereses con las actividades que tienen que ejercer legalmente.**

AGP

El informe del Servicio Jurídico nº 307/2014 de fecha 27 de junio, evacuado por la Letrada Jefe de los Servicios Jurídicos de la entonces Consejería de Asuntos Sociales vino a establecer la misma conclusión y estableció que *“corresponde a la Comisión de Tutela del Menor designar abogado cuando éste se encuentre detenido o a disposición judicial, y supondría una dejación de las funciones que le son propias dar lugar a que esa designación se efectuase de oficio”*.

Señala asimismo el informe que *“La dicción literal de los arts. 1 y 2 de la Ley 3/1999 de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, no deja lugar a dudas, aparte del asesoramiento y defensa de la Comunidad de Madrid, entendida en su más amplio sentido, las únicas personas físicas respecto de las cuales, el legislador ha previsto su representación y defensa en juicio por los Letrados de la Comunidad de Madrid son sus autoridades, funcionarios y empleados, condición que en ningún caso concurre en los menores tutelados”*.

Hay que decir que esta opción legal no es la seguida en otras Comunidades Autónomas, como por ejemplo Andalucía, en la que la asunción de la defensa de los menores tutelados corresponde al Cuerpo de Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía (artículo 41.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía), lo que no supone un conflicto de intereses y cuando pudiera considerarse como tal, se promoverá la designación de un defensor judicial.

Conviene recordar que conforme al artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tienen capacidad procesal los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

De igual modo, y sin referencia expresa a menores tutelados por la Administración, también la redacción actual del artículo 300 del Código Civil prevé que el Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombre defensor a quien estime más idóneo para el cargo.

No obstante, la reciente legislación civil ha ido mucho más allá, y ha previsto una situación concreta en que un menor tutelado pueda precisar la asistencia de un abogado que lo defienda, con el requisito específico de que este letrado haya de ser “independiente” (artículo 31.4 de la Ley Orgánica 1/1996 en la modificación introducida por el artículo 1.6 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, referido a centros de protección específicos de menores con problemas de conducta), respetando en todo momento la dignidad y los derechos de los menores y sin que en ningún caso, se les pueda privar de los mismos.

El Tribunal Constitucional en sentencia nº 183/2008 ha reconocido en su fundamento jurídico quinto, el derecho de cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, a ser oído en vía judicial en la adopción de medidas que afectan a su esfera personal, reiterando que forma parte del contenido esencial del art. 24.1 CE. De ese modo, con mayor razón, y por ser en muchos casos su presupuesto lógico, también forma parte del contenido esencial del art. 24.1 CE que se posibilite a cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional, la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal.”

Para ello, debe existir una especial relación de confianza entre abogado defensor y la persona (aunque sea menor de edad) sobre la que ejerce su patronazgo jurídico, dirigiendo su estrategia, medios probatorios y línea argumental con que defender su pretensión.



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

AGP

Por tanto, mientras se mantenga el criterio defendido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, **la asistencia y defensa letrada de los menores tutelados se debe realizar por un abogado independiente en ejercicio**, no contando la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad con personal adecuado para ello, por lo que se debe recurrir a la contratación de un profesional o un despacho de abogados externo.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA,
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - ***6248**
Fecha: 2024.03.01 08:31

Fdo: Silvia Valmaña Ochaíta